

CONGRESO NACIONAL

CÁMARA DE SENADORES

SESIONES ORDINARIAS DE 2016

ANEXO AL ORDEN DEL DIA N° 640

Impreso el día 20 de septiembre de 2016

SUMARIO

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES

Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea un Régimen de Contratación Público-Privada celebrado entre la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada y sujetos privados. (PE-61/16).

DICTAMEN DE COMISION

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Infraestructura, Transporte y Vivienda y de Asuntos Administrativos y Municipales, han considerado el mensaje 770/16 y proyecto de ley creando un Régimen de Contratación Público-Privada celebrado entre la Administración Pública Nacional, Centralizada y Descentralizada y Sujetos Privados; y, por las razones que dará el miembro informante, rechaza el P. E. 61/16 y aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO de LEY

CONTRATOS Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 1º — Los contratos celebrados entre los órganos y entes que integran el Sector Público Nacional con el alcance previsto en el artículo 8º de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control y sus modificatorias (en carácter de contratante), y los sujetos privados o públicos (en carácter de contratistas), con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructuras, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada o innovación tecnológica, y servicios conexos a los mismos, serán regulados exclusivamente por la presente Ley y por las Leyes Nros. 13.064 de Obras Públicas y 17.520 de Concesión de Obras Públicas, y sus modificatorias.

artículo 2º — Sustitúyese el artículo 6º de la Ley 13.064 de Obras Públicas por el siguiente texto:

Artículo 6° — El arrendamiento de inmuebles y de máquinas (implementos, equipos, transportes, embarcaciones, dragas, grúas flotantes, etcétera) destinados a obras públicas nacionales podrá ser realizado exclusivamente mediante el procedimiento de licitación pública.

Artículo 3° — Sustitúyese el artículo 5° de la Ley 17.520 de Concesión de Obras Públicas por el siguiente texto:

Artículo 5° — El Poder Ejecutivo puede crear sociedades anónimas mixtas con mayoría estatal, de acuerdo a lo establecido por la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, o entes públicos u otro tipo de persona jurídica para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, haciendo el aporte de capital que considera necesario o creando los fondos especiales pertinentes.

Los entes públicos que el Poder Ejecutivo dispone crear de acuerdo a esta ley tienen personería jurídica y plena capacidad para adquirir derechos, contraer obligaciones y estar en juicio como actor y demandado, en cumplimiento de las finalidades que motivaron su creación. Pueden asimismo proyectar su presupuesto anual, estatuto de su personal, reglamento y estructura internos.

El cumplimiento de las condiciones de la concesión será fiscalizado por el Estado, que designa su representación o delegación en el ente concesionario, cualquiera sea su naturaleza, con las facultades que se fijan en el contrato de concesión.

Si la concesión prevé que los entes públicos o sociedades anónimas mixtas con mayoría estatal concesionarios pueden o deben obtener total o parcialmente los fondos necesarios para financiar las obras motivo de la concesión mediante el recurso del crédito, las cartas orgánicas de tales entes o sociedades anónimas mixtas con mayoría estatal deben autorizarlos a emitir bonos o títulos y a contraer cualquier deuda u obligación vinculada con tales inversiones. Dichos bonos, títulos, obligaciones o deudas pueden gozar de la garantía del Estado Nacional de acuerdo con los términos del artículo 9° y esta circunstancia debe constar en la concesión.

Artículo 4° — Los contratistas deben dar estricto cumplimiento a la Ley 25.551 de Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos "Compre Trabajo Argentino" y a la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MiPyME). Las Jurisdicciones Adheridas pueden aplicar sus respectivas legislaciones, las que deben asegurar los principios de transparencia, concurrencia e igualdad.

Artículo 5° — Los contratistas deben garantizar el cumplimiento de la Ley 24.493 de Mano de Obra Nacional con relación al personal contratado.

Artículo 6° — Las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), conforme a lo establecido en la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en forma individual o a través de sus diferentes formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas sin perder su condición de tales, podrán constituirse en contratistas. La

reglamentación instrumentará los medios para que esta regla se haga efectiva.

Los contratistas -que no fueran MiPyMEs- deben hacer participar a MiPyMEs que no están vinculadas jurídica o económicamente con aquéllos o con sus integrantes y que están debidamente inscriptas en el registro de constructores o licitadores que corresponde a la región, en forma individual o asociadas, bajo la forma de subcontrataciones, en un mínimo del veinte por ciento (20%) del costo de la obra. La mitad de esta participación debe formalizarse mediante subcontratos nominados al momento de la presentación de la oferta.

Los pliegos de licitación deben establecer criterios para la calificación de las ofertas atendiendo el nivel de participación porcentual de MiPyMEs dentro del proyecto, el cual nunca debe ser menor al veinte por ciento (20%). Asimismo, los pliegos deben garantizar la factibilidad de integrar las capacidades técnicas o financieras de las mismas para poder alcanzar los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la licitación, cuando éstas en su condición de oferentes, se constituyan en una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.).

El Banco de la Nación Argentina puede proponer a la Autoridad de Aplicación de la presente Ley la instrumentación de mecanismos de garantía para MiPyMEs que faciliten el acceso de las mismas al crédito.

Artículo 7º — En ningún caso el valor del canon referido al mantenimiento y operación de la obra, puede ajustarse automáticamente mediante la utilización de valores, índices o coeficientes nacionales o extranjeros.

El valor de la retribución al contratista, referido al costo financiero, puede adecuarse a la fluctuación ascendente o descendente de las tasas de interés en los mercados financieros. La reglamentación fija la metodología aplicable en cada caso.

Las retribuciones deben ser incluidas en las respectivas Leyes de presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control, o a través de procedimientos similares establecidos o a establecerse por las Jurisdicciones Adheridas.

En la presentación de los presupuestos plurianuales deben constar en forma específica las partidas asignadas al pago de las retribuciones a cargo del Ente Contratante.

Artículo 8º — Sin perjuicio de las facultades y obligaciones previstas en la legislación específica, en sus reglamentos, en los pliegos de bases y condiciones, o en la restante documentación contractual, el contratista tiene:

- a) El derecho a la recomposición del contrato, cuando acontecimientos extraordinarios o imprevisibles de origen natural, tornen excesivamente onerosas las prestaciones a su cargo.

- b) La obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso el contratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de la cesión.
- c) La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, ambos de carácter natural, o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que tornen imposible la ejecución del contrato.

Artículo 9º — Debe darse especial prioridad, en el marco de la presente Ley, a todos aquellos contratistas que favorecen, cualitativa y cuantitativamente, la creación de empleo de calidad así como la producción de bienes de capital a nivel local.

Artículo 10º — Los integrantes de la cadena productiva nacional que fabrican bienes de capital destinados a la Obra Pública, gozan de los siguientes beneficios para los bienes producidos en la República Argentina y que cumplen con el criterio de bien nacional conforme al establecido en la Ley 25.551 de Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos "Compre Trabajo Argentino":

- a) Un 50% de reducción en el Impuesto a las Ganancias.
- b) Un bono fiscal para ser aplicado al pago de impuestos nacionales, por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del importe facturado por la venta de equipamiento con destino a la Obra Pública.

Artículo 11º — Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente, es causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta, en cualquier estado de la licitación, dar u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

- a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a una licitación o contrato hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones, o para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
- b) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado público con la competencia descripta, a fin de que éstos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen consumado en grado de tentativa.

Los funcionarios que tomaran conocimiento de la comisión de alguna de las conductas descritas en el presente artículo, deben formular la pertinente y formal denuncia ante los tribunales y órganos competentes según corresponda.

Artículo 12º — No pueden asumir la condición de oferentes o contratistas, por si o por interpósita persona, quienes se encuentran comprendidos en alguna de las siguientes situaciones:

- a) Carecer de capacidad o de legitimación para contratar con el Estado, en general, o con el contratante, en particular;
- b) Haber actuado como asesores contratados por la contratante en la implementación del proyecto en el que pretenden participar como potenciales oferentes, siempre que dicha participación pueda suponer un trato privilegiado con respecto al resto de los potenciales oferentes;
- c) Ser funcionario público dependiente de la contratante, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario esté vinculado por razones de dirección, participación o dependencia;
- d) Tener proceso concursal en trámite o quiebra;
- e) Querellados o denunciados penalmente por la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, con fundamento en las Leyes Penales Tributarias 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
- f) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
- g) Sumariados por la Unidad de Información Financiera (UIF).
- h) Las personas jurídicas, —incluidas las cooperativas — en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
- i) Si se hubiere decretado dentro de los tres (3) años calendarios anteriores contados desde la fecha de la última publicación del llamado público, la resolución por incumplimiento de su parte de un contrato celebrado con el Estado Nacional, en general, o con la contratante, en particular;
- j) Haber recibido sanciones por violación a normas ambientales siempre que la resolución se encuentre firme y hubieran sido

aplicadas dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores al llamado público;

Quienes se encuentren encuadrados en cualquiera de los supuestos antes mencionados, tampoco podrán formar parte como miembros de una empresa o entidad oferente o como subcontratista de esta, directamente o por intermedio de otra entidad controlada, vinculada o que forme parte de un conjunto económico con ella. Incluso la prohibición se dará en caso que se pruebe que por razones de dirección, participación u otra circunstancia pueda presumirse que son una continuación, o que derivan de aquellas empresas comprendidas en una o más causales antes explicitadas.

Artículo 13° — En la estructuración de proyectos de Obra Pública, la contratista debe promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito de los mismos, adoptando las medidas de prevención, mitigación, sanción o compensación, según el caso, de los impactos negativos o adversos que eventualmente se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto.

Artículo 14° — Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 15° — La presente ley es de carácter operativo y entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, sin perjuicio de la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 16° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión ,13 de Septiembre de 2016.-

Fernando E. Solanas